

**Es la vida la que está en juego**  
**Tres historias de liderazgo social en Colombia**  
**Trabajo de grado**  
**Maestría en Periodismo**

**Autor**

**Juan José Toro Sánchez**

**Tutor**

**Óscar Javier Parra Castellanos**

**Universidad del Rosario**

**2019**

# Es la vida la que está en juego

## Tres historias de liderazgo social en Colombia

---

Una mirada rápida en Google Trends muestra que a partir de julio de 2018 hubo un gigante aumento en el número de colombianos que buscaron los términos “líder social” o “líderes sociales”. ¿La razón? En las tres semanas siguientes al 17 junio, cuando Iván Duque derrotó a Gustavo Petro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, fueron asesinados —dependiendo de la fuente que se mire— entre 15 y 22 defensores de derechos humanos en el país, y buena parte de los medios de comunicación y figuras de autoridad se refirieron al tema.

A quienes defienden la vida, el territorio, el medio ambiente y las libertades civiles, a quienes se muestran como opciones políticas diferentes y enfrentan al poder tradicional, a quienes se apartan de las economías ilegales en lugares donde casi son ley, los grupos armados los han tenido en la mira. Ni siquiera la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, en noviembre de 2017, logró frenarlo: cifras de la Defensoría del Pueblo indican que en 2018 mataron a uno cada dos días, mientras que las del centro de estudios Indepaz dicen que fue uno cada cuatro días. La violencia contra defensores de derechos humanos viene desde antes del acuerdo de paz y se mantiene vigente casi tres años luego de su firma.

Pero, aunque la muerte los acecha, ellos y ellas no pueden detener su trabajo. Son reclamantes de tierras, campesinas abanderadas de la sustitución de cultivos, profesores que encabezan proyectos de construcción de paz en sus colegios, madres que piden justicia por la desaparición de sus hijos, artistas comunitarios que promueven la no violencia en sus obras u opositores de la minería a gran escala en sus territorios. Los líderes trabajan por una necesidad urgente: la construcción de un país en paz y con condiciones sociales, económicas y políticas que impidan el reciclaje de la guerra. “No nos vamos a cansar porque es nuestra vida la que está en

juego”, dijo Pablo López, uno de los protagonistas de las historias que leerán a continuación.

Ese aumento en las tendencias de Google prueba que hay un interés por conocer sobre liderazgo social en Colombia, incluso más allá de los asesinatos: la primera búsqueda relacionada en este caso es “¿qué hace un líder social?”. Esta serie de crónicas es un acercamiento a algunos de esos hombres y mujeres que llevan años trabajando por una vida digna para sus comunidades. ¿En qué ocupan sus días?, ¿de dónde surgió su liderazgo?, ¿cómo enfrentan el miedo?, ¿qué transformaciones han logrado?, ¿cómo educan a nuevos líderes?, ¿qué reciben a cambio?, ¿cómo se asocian entre ellos?

Esas son algunas de las líneas que intento explorar a partir de tres experiencias de liderazgo en Colombia. La primera es la de la Organización Femenina Popular, un colectivo de mujeres del Magdalena Medio que lleva casi medio siglo inventando formas de enfrentar la violencia y el machismo. La segunda es la de Gustavo Colorado, un artista de Tumaco que vio en la música tradicional del Pacífico una alternativa para alejar a los jóvenes del reclutamiento forzado. Y la tercera es la de Pablo López, un reclamante del Urabá que lucha por el derecho de más de 5 mil personas a habitar uno de los territorios colectivos más grandes del país.

Entre todas dan un panorama amplio, aunque siempre parcial, de lo que significa ser líder social en Colombia. Adelante.

## ¡Compañera, despierta compañera!

*La historia de la Organización Femenina Popular, un colectivo de mujeres del Magdalena Medio, muestra cómo el liderazgo social se construye paso a paso y en respuesta a contextos específicos.*

---

Nueve mujeres repiten una y otra vez la estrofa como si hicieran un conjuro:

*Río Magdalena*

*Me abrazó*

*Me protegió*

*Y muchas cosas me quitó*

Todas son mayores. Unas delgadas, con los huesos ceñidos a la piel. Otras morenas y rollizas. A varias les faltan dientes, les sobran arrugas. Y recitan a destiempo, pero con ímpetu, como niñas en un jardín. Están en el zaguán de una casa en Puerto Wilches, en el occidente de Santander, a pocas cuadradas del río que nombran.

“Arranquemos de nuevo”, dice William, un hombre gordo y carismático, a quien el sol de mediodía le abrasa la espalda y el cuello. Practican para una obra de teatro que presentarán pronto en un evento en Barrancabermeja.

Dentro de la casa, otras mujeres y niñas pintan un telar de veinte metros de largo que lleva dibujado el Magdalena. En una orilla trazan las líneas de una casa y sobre ella ponen el círculo con la cruz debajo que alude a lo femenino y que representa a Afrodita, la diosa del amor. En la mitad del círculo ponen las letras OFP: Organización Femenina Popular, unas siglas que cargan encima casi cincuenta años de luchas a favor de las mujeres del Magdalena Medio.

“Todo empezó, paradójicamente, con la Iglesia Católica, una institución tan permeada por el machismo”, dice Gloria Amparo Suárez, una lideresa de Barrancabermeja y representante legal de la OFP, sentada en un parque del sector nororiental de esa ciudad. Esa zona popular, recuerda, fue la que las vio nacer en 1972.

En la parroquia Señor de los Milagros —hoy una iglesia amplia, de paredes blancas, con un Cristo iluminado por luz azul de neón— la Pastoral Social, de la mano de los sacerdotes Floresmiro López, Nel Beltrán y Eduardo Díaz, notó con preocupación el problema de la desigualdad de género en esa ciudad petrolera.

Así lo escribió el mismo Díaz en un artículo de 2013: “Muchas mujeres estaban muy dependientes del esposo, dado que no tenían la capacitación para defenderse en la vida, entonces tenían que soportar muchas humillaciones y maltratos”. Los sacerdotes de la parroquia decidieron reunir pequeños grupos de mujeres para que aprendieran oficios que les permitieran tener cierta independencia económica. El primero de todos fue la modistería. Les pusieron “clubes de amas de casa”.

De la mano de una mujer llamada Teresa de Reyes, quien en ese entonces era trabajadora social en un hospital, ensayaron otros oficios: artesanías de barro, manualidades, arreglos florales. Elvia Suárez, una de las primeras integrantes, dice que “se iba motivando a las mujeres hasta tal punto que ya en todos los barrios había clubes de amas de casa”.

A esos clubes, de a poco, empezaron a llegar influencias de otros sectores. Tras la muerte de su padre, Yolanda Becerra, quien más adelante sería la directora de la organización, asumió el cargo de secretaria de la parroquia. Y a la vez que cumplía labores administrativas, como redactar partidas de bautizo o actas de defunción en una máquina Remington, participaba en el movimiento estudiantil, que por esa época se hacía más y más fuerte.

La presencia de Yolanda, sumada a otros factores, hizo que por la iglesia empezaran a frecuentar intelectuales y académicos. “Personas que llegaron a concientizar a las mujeres sobre muchos asuntos de los que apenas se empezaba a hablar”, dice. Asuntos como la posibilidad de autonomía de mujeres sin preparación y sin dinero, algo casi impensable en ese momento.

Un hecho que ayudó mucho en ese contexto de liberación en Barrancabermeja fue que empezaron las “recuperaciones de tierras” en barrios populares del nororiente como La Esperanza, Chicó o el Primero de Mayo: una forma de exigir su derecho a la vivienda digna. “En esas invasiones y recuperaciones”, escribió el sacerdote Díaz, “el papel más activo lo tenían las mujeres, porque eran las que estaban siempre en el barrio y porque para ellas el hogar tenía más importancia que para el hombre que vivía fuera”.

En Barrancabermeja, en parte por ser epicentro de extracción de petróleo y en parte por ser una de las ciudades más importantes del Magdalena Medio, el movimiento social y sindical evolucionó en un difícil contexto de violencia armada. Mientras los clubes de amas de casa se hacían más populares y los discursos se volvían más sólidos, toda la región sufría transformaciones políticas y sociales que serían determinantes para las mujeres.

A principios de los años ochenta, según cuenta un informe del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), empezó la presencia de paramilitares en la ribera derecha del río Magdalena, en Carmen y San Vicente de Chucurí, y desde allí se extendieron poco a poco por toda la región, forzando el desplazamiento de personas desde las zonas rurales hacia ciudades más grandes, precisamente como Barrancabermeja. En esa misma década, las guerrillas, sobre todo el ELN, pero también el EPL y las Farc, se posicionaron en la ciudad para enfrentar con las armas a la industria petrolera.

En 1993, un artículo del periódico *Mujer Popular* describió así los impactos en las mujeres: “En Colombia, de los trescientos mil desplazados por violencia política, el

70% corresponden a mujeres y niños. Ser mujer, pobre y migrante es una carga muy difícil de afrontar". Muchas veces viudas por culpa de la guerra, ellas tenían que asumir responsabilidades extra: brindar seguridad, proveer económicamente a sus familias o liderar los procesos de invasión de tierras para conseguir vivienda.

Un dato más: según el informe *Memoria de la infamia. Desaparición forzada en el Magdalena Medio*, del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1970 y 2013 los grupos armados desaparecieron a 2.627 personas en esa región. El 87% de ellos eran hombres. De ahí que quienes sufrían las consecuencias de esas desapariciones fueran muchas veces las mujeres: sus madres, sus hermanas, sus parejas. "La violencia contra la mujer no era solo un asunto doméstico, sino un asunto político", dice Gloria Suárez.

En 1988, los clubes de amas de casa se independizaron de la iglesia y empezaron a llamarse oficialmente Organización Femenina Popular. Durante la década siguiente el crecimiento no paró. En esos años decidieron meterse en política y eligieron a Rosalba Meriño, una de las suyas, como concejal, luego pensaron expandirse regionalmente y montaron sedes en otros cinco municipios de Santander, Antioquia y Bolívar, y más tarde lanzaron el Movimiento Social de Mujeres contra la Guerra y por la Paz, que reunió a más de 40 colectivos a nivel nacional. La OFP llegó a tener más de 2.000 mujeres en toda la región.

En medio de ese auge del movimiento social, la noche del 16 de mayo de 1998 partió en dos la historia de Barrancabermeja. La ciudad "tenía una presencia guerrillera inmensa que se pronunciaba hondísima en en las comunas populares de la ciudad", dijo en una entrevista a El Tiempo el padre Francisco de Roux, actual presidente de la Comisión de la Verdad. Y ese día, con la excusa de detener esa presencia, paramilitares de las Autodefensas de Santander y el Sur del Cesar, en complicidad con miembros de la Fuerza Pública, funcionarios de Ecopetrol y comerciantes, asesinaron a 7 jóvenes y desaparecieron a otros 25, supuestamente por ser colaboradores de la guerrilla.

A esa masacre le siguió un periodo de expansión paramilitar, que tuvo varios momentos: uno de desterrar a las guerrillas y sembrar terror en la población con masacres y desapariciones, otro de consolidar del control social sobre la población y otro más de permanencia, donde disminuyeron las masacres pero aumentaron los asesinatos selectivos y la persecución a organizaciones sociales, que se convirtieron en el principal objetivo de los armados.

Así lo explica la historiadora Diana Bernal, en su investigación *Historia de la Organización Femenina Popular en Barrancabermeja*: “Introdujeron códigos de conducta cargados de una serie de prohibiciones que implicaban una forma de ser y de hacer predeterminada: el manejo de la corporalidad, los hábitos de las personas, la cotidianidad e incluso las relaciones interpersonales y afectivas. La pretensión era cercenar en la población cualquier rastro de autonomía y de articulación a procesos colectivos democráticos”.

La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos y la Organización Femenina Popular fueron declaradas objetivos militares. En mayo de 2001, la Fiscalía alertó sobre un plan de las AUC para asesinar a Yolanda Becerra, quien ya llevaba más de una década como directora de la OFP, y en noviembre de ese mismo año, ante la negativa de entregarles una de sus sedes, 20 paramilitares llegaron con una volqueta y, en un hecho trágico que raya en lo inverosímil, se robaron la casa a pedazos: se llevaron las puertas, las tablas, las sillas, los ladrillos, los baños y las mesas.

Semanas más tarde, en una respuesta casi tan inimaginable como el robo mismo, decenas de mujeres salieron a caminar por los barrios del nororiente vestidas con batas negras, y puerta por puerta fueron pidiendo ladrillos para reconstruir su casa, y poco a poco lo lograron, no solo con la ayuda de los vecinos sino también con la que llegó de otros lugares del país a raíz de su gestión.

Si hay algo decisivo en la historia de la OFP, algo que las destaque, que las haya hecho sobrevivir a esa arremetida que quiso acabarlas, es su capacidad para organizarse y responder con imaginación a la violencia.

Primero están los colores: el negro de las batas, que representa la fortaleza para enfrentar el dolor, o el lila del logo, que es mundialmente utilizado en las luchas femeninas, o el verde, rojo y blanco de su bandera, que respectivamente son la esperanza, la fuerza y la paz. Luego están las cintas que agitan en el aire y los trapos estampados con mensajes antibélicos que llevan a las marchas. Y en esas marchas, otro símbolo que se repite: la cadena humana, que toma de las manos a decenas o cientos de mujeres para mostrar su unión y resistencia. Y uno más: las ollas vacías, que golpean para protestar por la pobreza y el hambre.

También tienen frases que aparecen en las paredes de sus sedes y en las camisetas que estampan y en los comunicados que escriben: “No parimos hijos ni hijas para la guerra”, “Es mejor ser con miedo que dejar de ser por miedo”, “Ni un hombre, ni una mujer, ni un peso para la guerra”, “Con la vida, hagámosle el amor al miedo”.

“Para la OFP la simbología ha sido otra forma de denunciar”, dice Gloria Suárez, y recuerda la vez que los paramilitares nuevamente les exigieron entregarles una de sus sedes, darles las llaves y salir de ahí, y ellas en cambio se reunieron y se encerraron todas, decenas de mujeres en esa misma casa, y empezaron a cantar y a gritar que no las entregaban, y desde eso las llaves también entraron al repertorio de metáforas: “Son nuestro territorio, son nuestro cuerpo”.

Entre 2001 y 2012, la Organización Femenina Popular denunció 148 casos de violaciones a los derechos humanos: amenazas, asesinatos selectivos, secuestros, desapariciones, torturas, desplazamientos. Fueron años difíciles, sobre todo hasta la desmovilización de los paramilitares, y prueba de esa tensión, entre muchas más, es una pequeña anécdota que recuerda Yolanda Becerra: en 2006, varias mujeres empezaron a llamarla asustadas porque en sus barrios corrían rumores de que iban a poner explosivos en las sedes de la organización.

A raíz de esas denuncias, en 2013 fueron reconocidas por la Unidad para las Víctimas como sujetos de reparación colectiva. El plan que diseñaron para repararlas, que hasta final de 2018 se había ejecutado en un 60%, les ha permitido empezar a reconstruir su proyecto político aporreado por la guerra a través de la recomposición del equipo, la formación de nuevas lideresas, la creación de escuelas de arte y cultura para jóvenes, la preservación de su memoria y el fortalecimiento de su Observatorio de Violencia y Discriminación Contra las Mujeres.

Después de dos años de trabajo, en septiembre de 2018, como parte del plan de reparación, inauguraron en Barrancabermeja la Casa de la Memoria y los Derechos Humanos de la Mujer. Con tamboras y música tradicional del Magdalena Medio, las lideresas de la OFP recibieron a invitados nacionales, entre ellos altos cargos de la Unidad para las Víctimas y el Centro Nacional de Memoria Histórica, y también a internacionales, como Tham Nguyen, la directora del Museo de la Mujer del Sur de Vietnam, quien viajó en una visita de intercambio cultural.

“Lo que hemos visto es que, generalmente, la guerra y la paz son machistas”, dijo Yolanda Becerra ese día. “Aquí vamos a contar qué pasó con las mujeres en medio de la historia del conflicto armado y también cómo fue la resistencia de las mujeres para construir vida y esperanza”.

En esa casa museo está comprimida la historia de la organización. Están sus consignas, las batas negras, la olla comunitaria y las máquinas de coser. Desde ahí, y en red con todas las otras sedes en distintas ciudades, dicen que seguirán enfrentando la discriminación y la violencia, seguirán apoyando a las madres cabezas de familia para que tengan autonomía, seguirán capacitando a niñas y a jóvenes para que crezcan libres, seguirán exigiendo educación, trato digno, soberanía alimentaria. Las mismas luchas con las que empezaron en los años setenta y que hoy no pierden vigencia.

Afuera del nuevo edificio, de ladrillos marrón y puertas de seguridad polarizadas, está sentada Gloria Suárez. Mira a lado y lado, como nerviosa, pero acostumbrada a hacerlo. A pocos metros están sus escoltas, parados junto a una camioneta blanca de la Unidad Nacional de Protección. “Quisiéramos sentirnos del todo seguras”, dice, “pero esto nos da muchísima esperanza y vamos a luchar para que se fortalezca”.

Detrás de Gloria, un afiche morado lleva impreso el himno de la organización, que en el coro, como una declaración de principios, dice:

*Compañera, despierta compañera*

*A la conquista de la libertad*

*Nos explotan porque no nos unimos*

*Si nos unimos, nadie nos vencerá.*

## La fuerza del cununo

*Gustavo Colorado, un músico tradicional del Pacífico, encontró en los sonidos de sus instrumentos una forma de alejar a los jóvenes del reclutamiento forzado en Tumaco, pero él mismo tuvo que huir de esa violencia que trató de transformar.*

---

Esta es una historia atravesada por la violencia, pero hoy Gustavo no quiere hablar de eso. Sin preguntarle todavía nada, prefirió empezar hablando de su casa. “Es de palafito. ¿Usted conoce los palafitos?”, dijo, “mi casa está metida en el mar, es de madera, pero ya tiene sus años y está débil. Se me va a caer y yo no estoy allá para salvarla”.

Gustavo Colorado es de Tumaco, Nariño. Es negro, tiene el pelo corto y sería más alto si sus piernas no estuvieran torcidas. Camina cojo desde niño por culpa de una fiebre tifoidea. Lleva puesta una chaqueta rompevientos verde fosforescente y casi siempre sonríe, aunque esté contando la historia más difícil. Llegó a Bogotá hace un año, arrastrado con fuerza por eso que decide no nombrar.

Su niñez enferma la pasó casi toda encerrado. Pero —y esto es algo que Gustavo hace a menudo: mirar hacia adelante—no recuerda el sufrimiento sino lo que hizo con él. Le gustaba asomar la cabeza por la ventana de su casa cuando pasaban los arrullos, una forma en que algunas comunidades del Pacífico alaban a sus muertos o a sus santos: veía a la gente cantar y tocar instrumentos de percusión como bombos, cununos y marimbas. “Me arrastraba de rodillas, de barriga, y me ponía a escucharlos, y de algún modo luego empecé a aprender”.

Con palos, con cubiertos, contra las paredes, sobre su cama, Gustavo empezó a golpear. Y poco a poco cogió ritmo, sonó mejor y se entusiasmó. Así que entró a una fundación llamada Tumac y se empezó a abrir camino como músico. No solo

aprendió a tocar, sino a hacer instrumentos, a convertirse en luthier, en artesano del Pacífico. A los 16 años, lo invitaron a hacer parte de la agrupación de su colegio, el Instituto Técnico Industrial.

“La música me hacía sentir por dentro algo muy poderoso”, dijo. Durante una década siguió tocando y practicando, día y noche, casi sin descanso. Dejó crecer la música adentro suyo. Por esa época se trasladó de la Avenida La Playa a Villa Las Lajas, un barrio recién creado en el sector La Ciudadela, en la comuna 5 de Tumaco. A ese lugar habían llegado varias familias que antes vivían peligrosamente en las bajamares. Fue en esa casa donde Gustavo entendió que el cununo era una extensión de su cuerpo y que los sonidos graves que salían de él eran el vehículo de algo más grande.

Pero a la vez que se convertía en músico, una preocupación se extendía en él, lo inquietaba, le dolía: que los niños pasaran hambre y que el hambre los hiciera más vulnerables a la guerra. Y las estadísticas respaldaban su preocupación: según el informe *Una guerra sin edad*, del Centro Nacional de Memoria Histórica, el Pacífico Sur, la subregión de Nariño donde está Tumaco, es la segunda zona del país con más niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado desde 2006.

Tumaco es uno de esos lugares que desafía con fuerza la noción de posconflicto en Colombia. Sus habitantes ven la violencia en auge y no en declive. Y una de las principales causas de ese auge es la sangre que deja a su paso el narcotráfico. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) dijo en un informe de 2018 que la situación en Tumaco “es tan crítica que es el único municipio catalogado en la categoría de mayor nivel de amenaza”. Solo entre 2012 y 2017, los cultivos de coca en ese municipio, el que más tiene en el país, pasaron de 5.065 hectáreas a 19.517: un aumento del 285%.

A finales del año pasado, a propósito del lanzamiento de un informe sobre la expansión de disidencias de las Farc en el Pacífico, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, dijo que “Tumaco tiene las

cifras más altas de homicidio en el país, las cifras más altas de defensores de derechos humanos asesinados, las cifras más altas de violencia sexual contra menores”.

A eso hay que sumarle que las cifras de desempleo, desnutrición, cobertura en salud y educación son también desoladoras, y que la presencia institucional es débil. En esa ciudad, donde la guerra y el abandono parecen no dar tregua, año tras año decenas de niños y jóvenes, casi sin otra oportunidad, caminan a enlistarse en un grupo armado para sobrevivir. Decenas que podrían ser cientos, porque las autoridades son conscientes de lo alto que es el subregistro cuando se habla de reclutamiento.

“A mí eso me empezó a preocupar hace muchos años, no solo ahora que Tumaco sale en las noticias”, dice Gustavo. “Y esa violencia tú la puedes cortar o la puedes alimentar desde la casa. Si yo, como padre, veo que mi hijo compra un reloj, unos zapatos, y le empiezo a pedir que traiga más plata, probablemente lo estoy presionando para que se meta en el negocio del narcotráfico”.

Jíbaros, campaneros, extorsionistas, lancheros, pistoleros, informantes, puntos, capos. La economía de la coca está metida hasta la médula en Tumaco, una ciudad de 200 mil habitantes, y eso no solo se nota en las cifras de extensión de los cultivos y en la tasa de homicidios, que triplica el promedio nacional, sino que se siente en las calles, que son dominadas por uno u otro grupo armado, y en el comercio, que en 2017 cerró 224 establecimientos, y también en las casas, donde los niños juegan a disparar con los dedos y a la hora de la comida se comenta la muerte de alguien en la cuadra.

“¿Qué podía hacer yo con eso?”, pregunta retóricamente Gustavo, “¿cómo aportar desde lo que sé?”. En su casa de Villa Las Lajas, decidió empezar por lo que para él es esencial: el hambre. “El hambre de un niño puede provocar una avalancha de graves consecuencias”, dice. Así que, junto con su hermana Consuelo y su esposa Maryuri, abrió las puertas de su casa para que niños y niñas llegaran a comer. Y ya

comidos, pasaba al próximo paso: invitarlos a un taller musical, donde les enseñaba a tocar instrumentos y a bailar danzas tradicionales. A ese taller lo llamó Centro Cultural Artesanal.

En más de una década, por el taller de Don Gu, como lo empezaron a llamar, pasaron cientos, acaso miles de alumnos. Él no lleva la cuenta, pero se atreve a especular. Todos los días abría sus puertas y los niños llegaban. “Yo hacía un experimento”, dice, “me paraba afuera de la casa y empezaba a tocar el cununo. Los pelados venían con solo escucharlo. La música tiene una fuerza que le permite hacer eso”.

Gustavo se reconoce como un líder social. En un país donde, según cálculos de la Defensoría del Pueblo, en 2018 asesinaron a uno cada día de por medio, decirlo no solo es un acto de valentía y dignidad sino también un riesgo. Según Carlos Guevara, director del programa Somos Defensores, que estudia este tipo de violencia en el país, “los defensores de derechos humanos son, fueron y seguirán siendo los que han defendido la paz negociada”.

“Un líder social es alguien que arropa, que protege”, responde Gustavo cuando le preguntan por qué él entra en esa categoría. Desde que se volvió un tema de agenda, ha crecido un estigma y una desinformación sobre la labor que cumplen. De un lado, han sido señalados como de izquierda, incluso se les han achacado intereses relacionados con los de grupos armados. De otro lado, la población en general no reconoce muy bien qué es lo que hacen, qué es lo que lideran, cuáles derechos defienden.

¿Y quiénes son? Un rastreo rápido en prensa y redes de la búsqueda “líderes sociales”, más allá de las noticias de violencia contra ellos y ellas, deja ver algunos perfiles.

Por ejemplo, son líderes los indígenas wiwa que protegen los lugares sagrados de la Sierra Nevada, las mujeres transgénero que luchan contra la discriminación y la desigualdad, los ribereños que lograron que se reconociera al Atrato como un sujeto

de derechos, las jóvenes de la Organización Femenina Popular que impulsan un museo de memoria en Barrancabermeja o un profesor paisa que enseña el poder transformador del arte en sus clases con jóvenes de bachillerato.

¿Y qué hacen? En esencia, salvar vidas: protegerlas.

“Y yo creo que la música salva vidas, que te pone a respirar y a pensar mejor”, explica Don Gu para enlazar su discurso sobre liderazgo. “Traté de hacer eso con muchos jóvenes que empezaron a ver la vida de otro color. Con mi música, con mi danza, con mi artesanía siempre traté de protegerlos desde ahí. Para mí un líder es alguien que se preocupa por la gente”.

En un auditorio mediano del Parque de los Deseos de Medellín, durante la Fiesta del Libro y la Cultura de 2018, Gustavo dio una charla sobre cómo el arte sirve para enfrentar la violencia. Y nuevamente, allí tampoco quiso hablar de violencia. Prefirió insistir en el arte, mostrar lo que hace sentir la música, tratar de probar su poder transformador.

Frente a él, unas 50 personas sentadas en gradas: niños, mamás, estudiantes, personas mayores. Gustavo los enumeró del uno al tres. Y a los uno les pidió seguir un ritmo con las palmas. A los dos, golpear con otro ritmo la madera de las paredes. Y a los tres, hacer un sonido con la boca. En medio de esos sonidos, él empezó a cantar una ronda infantil tradicional del Pacífico. La actividad duró dos minutos, pero Gustavo ilustró el punto que quería: todo el público terminó de pie, sonriendo.

“¿Ven lo que transmite la música?”, les dijo. “Si esto es así, imagínense lo que puede uno hacer en un proceso con niños y jóvenes”.

Una metáfora obvia para describir lo que hace este líder, una de caricaturas, sería la del el ángel y el diablo sobre los hombros. Dos extremos que aconsejan cosas opuestas. Uno es él, que propone explorar el arte. El otro son los grupos armados,

que intentan seducir a los jóvenes con dinero y poder. Pero el problema de Tumaco no es así de simple.

“Mire, nosotros con la música podemos ofrecer una alternativa distinta, yo creo en su poder transformador, pero cuando tengo pelados que llevan varios años conmigo y después de que salen del taller no tienen un trabajo o una forma de buscar sustento, pues es muy complicado”. El narcotráfico les ofrece plata. Competir con eso a largo plazo no es posible sin acompañamiento estatal que garantice salud, educación, empleo, alimentación. Lo básico.

En un café bogotano, después de más de un año desplazado en la capital, Gustavo dice que extraña Tumaco: el calor húmedo, el mar que cubre los pies, la comida pacífica, el sonido de las tablas.

Desde finales de 2017, cuando las noticias se llenaron de titulares sobre líderes asesinados, y cuando su ciudad quedó en el ojo del huracán después de una masacre de siete campesinos, Gustavo se empezó a asustar. En su barrio aumentaron los asesinatos, y con ellos el miedo y el silencio. Los niños seguían llegando al Centro Cultural Artesanal, pero él los recibía con reserva.

¿Se sentía particularmente amenazado? ¿O era el mismo miedo que podía tener un habitante cualquiera de Tumaco?. “Mire, hay gente a la que no le conviene que yo haga lo que hago”, dice. “Cuando tengo un pelado que se pasa toda la semana tocando marimba en mi taller, ese es un pelado menos que reclutan”.

Durante varios meses, él y su familia trataron de mantener un bajo perfil, pero en marzo de 2018 la situación se hizo insoportable. La tensión creció y creció, y aunque nunca hubo una amenaza concreta Gustavo vivía intranquilo. Temía por su esposa, por sus hijos, por sus alumnos y por él mismo.

En la madrugada del 15 de ese mes, empacó un par de mudas de ropa y se echó una marimba y un morral al hombro. Con 50.000 pesos en el bolsillo, se montó en un bus

y llegó a la capital. Apenas se bajó en el Terminal del Sur, tuvo frío. Se sintió solo y rompió en llanto. Con ayuda de un hombre que lo vio desesperado, se registró en la Unidad para las Víctimas y lo llevaron a un albergue. Semanas después, pudo conseguir dinero para que su familia también viajara.

Su taller, en cambio, no pudo traerlo con él. Tampoco a sus alumnos, que quedaron a la deriva. “Algunos me llaman y me dicen que me extrañan. Están desubicados”. Gustavo muestra el WhatsApp de su teléfono, donde tiene conversaciones con algunos de ellos. Le preguntan cómo está. Le cuentan qué ha pasado de nuevo. Se mandan bendiciones de lado y lado. “Yo llevo muchos años aprendiendo de Don Gu”, dice Michael, uno de los jóvenes, “y sé lo importante que es él para muchos pelados que no tienen nada más. Usted sabe lo que pasa acá cuando los pelados no tienen nada más”.

Gustavo se ve contrariado. Vuelve a hablar de su casa, que se está cayendo. De su barrio, donde todavía no puede volver. De su familia, que no se adapta a Bogotá. De su trabajo, que durante este año se convirtió más en rebusque que otra cosa. Del Estado, al que Tumaco se le salió de las manos. Y de sus muchachos, a quienes les falta su líder. Pero nuevamente, ante toda la adversidad, esboza esa sonrisa suya tan reconfortante. “¿Le digo yo qué creo? Que puede ser que yo no esté allá, pero es que, después de tanto tiempo trabajando juntos, ellos están preparados para seguir mientras vuelvo. Es que el líder no soy yo, el líder somos todos”.

## Es la vida la que está en juego

*Pablo López, representante legal del Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó, encabeza la lucha de más de 5 mil personas por la tierra en un contexto lleno de enredos jurídicos y rivales violentos.*

---

Pablo López resuelve problemas. Es un trabajo, dice él, como cualquier otro. Como un bombero que apaga incendios o un sastre que remienda ropa. Aunque advierte que los suyos son muy diversos:

Una disputa de linderos. La escuela necesita un tarro de pintura. Falta un puente y hay que conseguir gasolina y cortar madera. Vienen representantes de una institución en Bogotá y hay que reunir a la gente. Hay que construir un restaurante escolar. Necesitamos cinco bultos de láminas de zinc o clavos. Nos piden un censo. El marrano de un vecino se come la yuca del otro. Una vaca tumba una cerca.

Pablo —alto, piel negra, mirada amable, poco más de treinta años— es el representante legal del Consejo Comunitario La Larga y Tumaradó, un territorio colectivo afro ubicado en la parte chocoana del bajo Atrato. Desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche se ocupa de los problemas de 49 veredas repartidas en más de 107 mil hectáreas, uno de los territorios colectivos más grandes del país.

Y aunque su lista inicial enumera conflictos cotidianos, en apariencia sencillos, detrás de todos ellos hay un gran tema. Uno que comparten afrodescendientes, indígenas y campesinos. Quizás el gran tema colombiano. Al mismo tiempo que resuelve problemas veredales del día a día, Pablo López encabeza la lucha de su pueblo por la tierra.

A principios del siglo pasado, por las aguas del río Atrato, que recorre buena parte de Chocó y por momentos marca el límite con Antioquia, empezaron a llegar familias negras a poblar las cuencas de otros dos ríos: La Larga y Tumaradó. Se asentaron en esas tierras de parte plana y parte loma, de zonas agrícolas y otras inundables, y allí pescaron y cultivaron para vivir.

“Los que llegamos acá, a lo que hoy es el territorio colectivo de La Larga y Tumaradó, vinimos de Bolívar, Sucre, Córdoba y Antioquia, del río San Juan y del Baudó, y de la región del Alto y el Medio Atrato”, explicó hace un tiempo Mario Castaño, quien fue líder de la comunidad y mártir de esta lucha: un hombre que en su vida se desplazó 21 veces y aún así siguió peleando por la tierra hasta que una noche de noviembre de 2017 entraron a su casa y lo asesinaron a balazos frente a su familia.

En los años cincuenta se sumaron los que huían. De Córdoba y Sucre viajaron campesinos desplazados por la violencia bipartidista y los latifundios ganaderos. Encontraron tierras vacías con animales silvestres y cuerpos de agua para transportarse y sacar comida. Sobrevivían sembrando arroz, cortando madera y pescando. Iban a las cabeceras municipales cercanas, como Chigorodó, en Antioquia, o Riosucio, en Chocó, para vender lo que producían y comprar lo demás.

Pasaron décadas así, con pocos cambios. Les sumaron cultivos de maíz y plátano a los de arroz, y construyeron carreteras como alternativas al río. Todo relativamente tranquilo. “El peligro más grande era que lo picara a uno una serpiente”, dijo Reimon Valencia, tesorero del consejo comunitario. Así murieron muchos: el hombre contra la naturaleza.

Luego, como siempre, vino el hombre contra el hombre.

La ubicación estratégica, la extracción de recursos naturales y la llegada de grandes proyectos económicos llevaron la violencia a extremos inusuales para sus pobladores. “Aquí vinieron fue por el territorio”, dijo Pablo López, “desde el 91

entraron los grupos al margen de la ley y luego llegaron los ricos a comprar barato”. Otros habitantes, sin embargo, remontan la violencia una década más atrás.

Primero, como en muchos lugares del país, estuvieron las Farc. También el ELN y el EPL. Las guerrillas entraron a ejercer control territorial. Impusieron sus reglas y sus formas de organización, e hicieron lo posible por reclutar en sus filas a miembros de la comunidad. Su discurso era el de la defensa del pueblo, aunque en esa región recuerdan que fueron los causantes de los primeros desplazamientos, en comunidades como La Loma y Venecia, hoy parte del territorio colectivo.

Pero el miedo, el miedo de verdad, era por los rumores que corrían. “Allá vienen los mochacabezas”, cuentan que escuchaban. Los paramilitares, pues. Eran finales de los noventa.

Desde años atrás, guerrilleros de las Farc, enterados de lo que estaba pasando en otros lugares del país, les habían dicho: “No vendan sus tierras, no las vendan barato”. Mario Castaño y Pablo López coinciden en un recuerdo: que en los años noventa una empresa llamada Maderas del Darién empezó a comprar tierra a los campesinos de esa zona. Que pagaban a 150 mil pesos la hectárea. Que decían que iban a poder seguir viviendo en sus casas porque solo necesitaban extraer madera. Pero que cuando alguien no vendía llegaban amenazas.

Los guerrilleros reconocían las estrategias de despojo y dijeron que iban a hacer frente. Sabían que los paramilitares llegarían a disputarles el control del territorio: una ubicación geográfica que favorece el tráfico de armas, de insumos químicos y de drogas ilícitas, que es estratégica en lo militar porque sirve de refugio y de corredor al suroeste del país, al bajo Cauca antioqueño, al Valle del Sinú y al Nudo de Paramillo, y que encima de todo deja cultivar coca, palma aceitera y banano.

Entre finales de 1996 e inicios de 1997, los rumores tomaron rostro. Los paramilitares —sobre todo dos grupos: el Frente Álex Hurtado del Bloque Bananero y

el Bloque Élder Cárdenas— llegaron con violencia e hicieron replegar a las guerrillas y desplazar a la población.

La primera masacre, recuerda Pablo, fue el 16 de enero de 1997. A las diez de la mañana, hombres armados entraron a la vereda Brisas, en Riosucio, y empezaron a preguntar dónde estaban los guerrilleros, pero nadie contestó, y ese silencio, que entendieron como complicidad, lo castigaron con sangre: mataron a tres personas y desaparecieron a otras siete. El miedo hizo desplazar a 44 familias, que agarraron lo que pudieron y se fueron para un corregimiento cercano, aunque luego, cuando vieron que la violencia siguió, tuvieron que huir más lejos.

Como ese, Pablo puede contar la historia de varios desplazamientos en el bajo Atrato choaco. El de la Operación Génesis, por ejemplo, cuando en febrero de 1997 más de 3.500 habitantes de esa región salieron de ahí por culpa de los bombardeos del Ejército, que combatía a las Farc. En una sentencia de 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aportó argumentos que probaron la colaboración entre la Brigada XVII y paramilitares en ese contexto. Un fallo del Juzgado 8 de Bogotá contra el exgeneral Rito Alejo del Río, antiguo comandante de esa brigada, dijo que “había una alianza macabra entre las AUC y el Ejército contra la guerrilla” en esa región.

Los asesinatos, las masacres y las amenazas ocurridas durante la arremetida paramilitar hicieron que cerca del 90% de la población del consejo comunitario se desplazara a finales de los noventa. Entre ellos, Pablo y su familia. Él no ahonda en su propio relato, pero cuando se refiere a las víctimas de desplazamiento lo hace en primera persona del plural: “nosotros, los desplazados”.

Sobre el papel, la motivación de los paramilitares era disputar el control territorial con la guerrilla, contener su expansión, pero en la práctica no fue solo eso. Así lo explica el libro Justicia y Paz. Tierras y territorios en las versiones de los paramilitares, del Centro Nacional de Memoria Histórica y la Organización Internacional para las Migraciones:

“El destierro, además de ser una maniobra de vaciamiento de poblaciones para consolidar territorios y corredores, reconquistar parcelas adjudicadas por el Estado y atesorar tierras, también fue una estrategia para apropiarse de zonas ricas en recursos naturales”.

Pablo recuerda otro desplazamiento, uno de tantos, y a su mente viene la imagen de la lluvia torrencial cayendo sobre el río. Y bajo esa lluvia, las familias corriendo. Y él, adolescente, empapado, ayudando a cargar maletas y enseres desde las casas de madera hasta las pangas preparadas para escapar.

“Yo siempre he tenido esa vocación”, dijo, “de la mano de Dios ayudo al prójimo cuando lo necesita”.

Una vez, durante una avanzada de paramilitares que entraron con violencia a una vereda, Pablo se ofreció a refugiar gente en su casa, donde vivía con su papá, Pablo Roberto López, y su mamá, Donata Moreno. En medio de la balacera, del griterío y de la angustia, padre, madre e hijo propusieron orar. Acostados en el piso, camándula en mano, repasaron un rosario.

Con esa anécdota, Pablo introduce la explicación de cómo se hizo líder social. “Yo soy cristiano evangélico. En mi casa nos levantaron con la enseñanza del servicio, de ayudar. Nosotros sabíamos cantar y predicar. La gente venía a nuestra casa en los buenos tiempos y en los malos. Nos buscaban mucho. Entonces empecé a organizar actividades, a participar en todo, y me di cuenta del poder que había en la palabra”.

Ese liderazgo que empezó con acciones comunitarias fue agregando capas con los años, a medida que advirtió el gigante y complejo problema que tendrían que enfrentar para vivir tranquilos en las tierras que dejaron al desplazarse.

En 1993, la Ley 70 reconoció, entre otras cosas, el vínculo de las comunidades negras y raizales con los baldíos que por largo tiempo habían ocupado en las riberas del Pacífico. Como parte de la implementación de esa ley, en el 2000 se adjudicó la propiedad colectiva del territorio de 107 mil hectáreas que hoy se llama Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó.

Aunque esa ha sido una de las mayores conquistas para las comunidades negras en Colombia, Pablo señala una paradoja casi trágica: “Cuando nos adjudicaron el territorio, la región seguía siendo controlada por paramilitares y muchos estábamos desplazados”. Era su tierra, pero no.

Esa contradicción tampoco terminó de resolverse luego, cuando los paramilitares se desmovilizaron entre 2004 y 2006 y 1.500 familias, alrededor de 5.000 personas, empezaron a retornar. Según un documento del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), el territorio colectivo está dividido así: 41% de zonas bajas inundables, que no son productivas; 51% en manos de empresarios y ganaderos; 3% de propiedades individuales previas a la titulación colectiva, y 5% para las comunidades afrodescendientes.

Los testimonios de varios habitantes del consejo comunitario explican cómo, durante los años de la violencia paramilitar, la tierra cambió de manos debido al despojo. Les ofrecían sumas pequeñas de dinero —alrededor de 200 mil pesos por hectárea— y los intimidaban con frases como “o vende usted o vende la viuda”. Esa estrategia, confirma el libro *Narrativas de la guerra a través del paisaje* del Centro Nacional de Memoria Histórica, favoreció el crecimiento de economías legales, como la extracción maderera, la ganadería extensiva o los monocultivos de plátano, cacao y arroz, y también de economías ilegales, como la de la producción de cocaína.

El desplazamiento y el despojo fueron la base para que hoy esas tierras estén en un enredo jurídico, a veces doblemente tituladas, y en muchos casos en disputa. Las comunidades afro que retornaron a ocupar lo que la Ley 70 les reconoció se han

encontrado con órdenes de desalojo acompañadas de amenazas, agresiones físicas y hasta quema de viviendas y cultivos.

“¿Por qué luchamos nosotros?”, se pregunta Pablo. “Por un vivir mejor”.

Cuando recorre alguna vereda —al lado del horizonte boscoso, o por los caminos que llevan al río, o por los paisajes cultivados de arroz y plátano, o bordeando a las pequeñas ciénagas cercadas por búfalos— alguien suele acercarse a preguntarle: “Hombre, ¿cómo va esa vaina de la tierra?”.

A primera vista, Pablo no parece cargar semejante responsabilidad en sus hombros. Se le ve relajado, sonriente, confiado. Pero cuando hay que hablar de la difícil situación legal de esas tierras, expone sus argumentos con claridad y paciencia. Se sabe de memoria las leyes, los números de radicado, las fechas, las consideraciones que aparecen en una sentencia. Suele cargar en su maleta una carpeta con copias de los documentos más importantes del proceso: sentencias, fallos, derechos de petición, demandas, informes... “Aprendí todo eso en el proceso”, dice. “A veces voy a talleres, a veces veo noticias, cuando puedo entro a internet, siempre leo mucho. Me habría gustado ir a la universidad”.

No importa que no haya ido. Pablo, aunque todavía joven, va a cumplir dos décadas siguiendo de cerca (y ahora liderando) la lucha por ocupar ese territorio. Y a falta de educación formal, le ha sobrado vehemencia. Finalmente, es su tierra la que está en juego: “Es aquí donde cultivamos. Y en ese río pescamos y nos bañamos y lavamos ropa. En esa montaña cogemos madera para vender y subsistir. Lo poquito que tenemos se lo debemos a esa naturaleza”.

Ese trabajo, sin embargo, no lo hace solo. Él se encarga de aclarar eso y de paso explica rápidamente la historia reciente de la organización de las comunidades afrodescendientes.

“Cuando mi abuela estaba joven, había caciques liberales y conservadores a los que les pedían cosas, un novillo, lo que fuera. Eso lo hacían desde comités de trabajos, donde delegaban quién gestionaba qué. Luego hay un salto y se organizan en juntas de acción comunal. Cada comunidad tenía una. Ahí tenían un fondo y todos aportaban. Pero hubo más cambios y ahora como pueblo negro tenemos la Ley 70 de 1993”.

Esa ley, que reglamenta el derecho sobre la tierra, también habla de la forma en que se deben organizar para gobernar. De las juntas de acción comunal pasan a los consejos comunitarios: se convierten en autoridades étnico territoriales que administran y protegen el territorio colectivo que les asignaron. Los consejos tienen a la cabeza juntas directivas, conformadas por siete personas, pero su labor también la alimentan las juntas de apoyo que hay en cada vereda.

Solo hay un representante legal y ese es Pablo. “Es el que firma”, dice. “¿Qué decimos nosotros? Que este es un proceso mancomunado: líderes locales, juntas de apoyo, junta directiva, jóvenes, ancianos, muchas personas que hoy aportan cosas valiosas para seguir en la lucha. Esos líderes trabajan de manera incansable”. El territorio es muy grande y muy complejo como para que el representante legal esté enterado de todo inmediatamente. Por eso funciona bien ese liderazgo escalonado. “Esto es una cadena”, explica. “Existe un problema y lo vamos transmitiendo hasta donde tenga que llegar para que entre todos le demos solución”.

En la práctica, eso significa que el Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó tiene, además de Pablo, decenas de líderes que diariamente recorren el territorio, que resuelven problemas de linderos y buscan recursos para pintar la escuela y organizan actividades culturales. La palabra comunidad toma una dimensión mucho más amplia.

Y todos esos líderes, cómo no, también están pendientes de seguir exigiendo su derecho a la tierra y a una vida digna. Así lo describe Reimon, el tesorero:

“Nosotros vamos donde el alcalde, donde el gobernador, donde los representantes de las entidades y les planteamos los problemas. Y cuando no ayudan a las buenas, vamos a las vías de hecho, a la protesta, o enviamos derechos de petición, demandamos, o vamos a la emisora y hacemos incidencia, o en televisión. A veces hacemos documentales y mostramos nuestra realidad y decimos: así estamos. A veces vienen organizaciones internacionales y les decimos: así estamos”.

Esa incidencia pública ha puesto a varios de los líderes bajo amenazas. El caso más recordado es el de Mario Castaño, asesinado en 2017, quien había sido uno de los voceros más activos para hablar de restitución y era testigo en varios procesos penales de despojo. En ese mismo año, al suyo se le sumaron otros tres asesinatos de reclamantes de tierras en el bajo Atrato: Porfirio Jaramillo, Jesús Alberto Sánchez y Hernán Bedoya.

“Aquí ser líder es un delito”, lamenta Pablo. “Pero sacamos fuerza no sé de dónde para seguir diciendo las cosas. Es que si no las decimos, nos desaparecen. Y no me refiero solo a que nos maten, sino que desaparecen nuestro estilo de vida, nuestra forma de relacionarnos, nuestra posibilidad de ser con la naturaleza. Vamos a existir pero sin ninguna motivación”.

Pablo dice que la gente de las ciudades no entiende qué es el buen vivir y por eso es difícil conectar con la causa que él y su comunidad defienden. ¿Qué es la tierra para alguien que vive en un apartamento en arriendo? ¿Qué es el río para quien va al supermercado y consigue agua potable embotellada? ¿Son algo las montañas, los árboles, los pájaros, la lluvia y el sol, más que parte del paisaje?

“Si no defendemos el territorio como comunidad campesina y afro, nos sacan y nos someten a un sistema que nos va a convertir en esclavos. Nos van a obligar a vivir como ese sistema lo establece. En la ciudad todo es plata. En nuestra comunidad caminamos dos horas, tres horas relajados. Dormimos con las puertas abiertas. Vamos donde el vecino y le decimos que nos dé un gajo de plátano o un puño de arroz o un coco o una yuca. No queremos sufrir. Por eso les decimos a nuestros

hijos y nietos que hay que defender el territorio para poder seguir viviendo bien. Porque el sistema que hay fuera de aquí no es el mejor para nosotros”.

Esa pelea no ha sido fácil: ese territorio sigue siendo reclamado al tiempo por empresarios, ganaderos, campesinos y afrodescendientes. Y la violencia no cesa.

En 2014, para tratar de encauzar la solución de ese problema, un juez de tierras de Quibdó ordenó a varias autoridades locales y nacionales cumplir con unas medidas cautelares para proteger los derechos de las comunidades afrodescendientes. A los alcaldes de cuatro municipios y a la Policía: no autoricen desalojos. A la Unidad Nacional de Protección: estudien las medidas de seguridad colectiva. A la Unidad de Restitución de Tierras: avancen con el proceso de los retornantes. A la Superintendencia de Notariado y Registro: no registren transacciones que impliquen negocios sobre esas tierras.

En marzo de 2018 hubo una audiencia pública para evaluar el seguimiento de las medidas cautelares en resguardos indígenas y consejos comunitarios, entre esos el de La Larga y Tumaradó. En un video de ese encuentro, Pablo hizo un balance de lo que ha pasado desde 2014: “Muchas instituciones han hecho caso omiso frente a la orden que les dieron. Así que aquí, reunidos con los representantes de las instituciones, queremos exigir que se cumpla, porque hay un cumplimiento solo de un 35% de esas medidas”.

“¿Y qué piensa usted de que no cumplan?”, le preguntó la entrevistadora en ese video.

“Nosotros como líderes vamos a seguir presionando”, respondió Pablo, “así sea de manera formal, con un derecho de petición o un pronunciamiento. O manifestarnos con alguna protesta: tirarnos a las calles a exigir el cumplimiento”.

Esa misma semana, la insistencia de los más de 5.000 habitantes liderados por Pablo dio un fruto: el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Tierras de

Quibdó admitió la demanda de derechos territoriales que habían presentado. Quiere decir que el juez aceptó los argumentos que probarían el despojo y que los presuntos despojadores deben demostrar que no lo son.

El camino es largo. El tiempo pasa lento. Pablo y los demás líderes lo saben. Que tras años de exigir su derecho sobre esas tierras apenas un juez acepte la demanda puede parecer frustrante. Y hacerlo en medio de las amenazas, de la muerte de sus compañeros de batallas, lo vuelve aterrador. Pero desistir no es una opción.

“Esta lucha es incansable”, repite. “No nos vamos a cansar porque es nuestra vida la que está en juego”.